



DOCUMENTO DE TRABAJO



Factores que afectan la implementación de las Contribuciones Nacionales en el sector agropecuario y forestal en América Latina

Un análisis en base a los informes de la Plataforma Climática Latinoamericana en 10 países de la región



Marzo 2017

Acerca de este Documento de Trabajo

Este documento es el resultado de un proyecto promovido por la Plataforma Climática Latinoamericana (PCL), con el apoyo de la Alianza Clima y Desarrollo (Climate and Development Knowledge Network, CDKN por su sigla en inglés), y coordinado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) con el objetivo de fortalecer la capacidad de los actores sociales para participar y monitorear la implementación de las Contribuciones Nacionales en diferentes países de América Latina. En el marco de esta iniciativa, miembros de la PCL elaboraron informes nacionales en 10 países de la región en los cuales se identificaron y analizaron factores facilitadores y obstaculizadores de los procesos de implementación de las Contribuciones Nacionales en los sectores agropecuario y forestal de cada país y se plantearon recomendaciones para fortalecer la agenda y los procesos de implementación. En base al análisis de estos informes, este Documento de Trabajo plantea algunos de los factores y desafíos claves que inciden sobre las perspectivas de implementación de las Contribuciones Nacionales en el contexto latinoamericano.

Sobre la Alianza Clima y Desarrollo

La Alianza Clima y Desarrollo (Climate and Development Knowledge Network, CDKN por sus siglas en inglés) asiste a los países en vías de desarrollo en el diseño e implementación de un desarrollo compatible con el clima. CDKN fue concebida como una red de aprendizaje apoyada en un programa de gestión de conocimiento y redes en América Latina y el Caribe, fomentando la reflexión participativa de los proyectos que está apoyando. CDKN identifica y comparte los logros, retos y aporta en la definición de lecciones aprendidas. Los documentos que se presentan son el resultado de un esfuerzo en conjunto por definir qué funciona y qué no en estos procesos.

Autor

Daniel Ryan es coordinador del área de sustentabilidad de la Escuela de Postgrado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) e investigador asociado a FARN.

Revisores

Este documento no habría sido posible sin las revisiones y valiosas contribuciones de colegas de CDKN, de la Secretaría de la PCL y de los autores de los informes nacionales: Daniela Contreras y María José Pacha (CDKN), Marianela Curí (FFLA/ Secretaría Ejecutiva de la PCL), María Marta Di Paola (FARN), María Teresa Vargas Ríos y Ana Rosa (Fundación Natura Bolivia), Tiago Reis, Fernanda Bortolotto, Gabriela Russo Lopes, y Laura Braga (IPAM), Maia Seeger P. (SustentaRSE), Wendy Arenas Wightman y Camilo Romero (ALISOS), José Pablo Rojas Wang (AED), María Amparo Albán y Daniel Barragán (ACD Consulting), Jorge Martínez Trabuco (Fundación Moisés Bertoni), Isabel Calle, José Luis Capella, y Sharon Zababurur (SPDA), Laura Marrero y Federico Bizzozero (CEUTA).

Sobre PCL

La Plataforma Climática Latinoamericana (PCL) se formó en el 2009. Actualmente, está conformada por 20 organizaciones de la sociedad civil, del campo ambiental, social, empresarial y académico, en 10 países de la región. La PCL es un espacio de convergencia, diálogo y articulación de diversos actores comprometidos a encontrar respuestas para los desafíos del cambio climático; a través de la generación y difusión de conocimiento para la generación de políticas públicas de cambio climático. www.intercambioclimatico.com / **Twitter:** @intcambioclima / **Facebook:** IntercambioClimático

Sobre FARN

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) fue creada en 1985. Es una organización no gubernamental, apartidaria, cuya misión es promover el desarrollo sustentable a través del derecho, la política y la participación institucional de la sociedad. www.farn.org.ar / info@farn.org.ar / **Twitter:** @farnargentina / **Facebook:** farnargentina



Factores que afectan la implementación de las Contribuciones Nacionales en el sector agropecuario y forestal en América Latina.

Un análisis en base a los informes de la Plataforma Climática Latinoamericana en 10 países de la región

Autor: Daniel Ryan



Índice

I. Resumen ejecutivo	3
II. Introducción	3
III. Algunas consideraciones metodológicas	4
IV. Factores facilitadores y obstaculizadores	5
1 Nivel de integración con procesos y políticas de desarrollo	5
2 Fortaleza de la institucionalidad	8
3 Disponibilidad y transferencia de información y tecnologías	11
4 Factores y contextos políticos	13
V. Conclusiones y mensajes claves	14
VI. Referencias bibliográficas	16
Informes nacionales	17



I. Resumen Ejecutivo

Este Documento de Trabajo analiza los resultados de los informes nacionales elaborados por miembros de la Plataforma Climática Latinoamericana (PCL) en 10 países de la región en los cuales se identificaron y analizaron los principales factores que actúan como facilitadores y obstaculizadores de los procesos de implementación de las Contribuciones Nacionales en los sectores agropecuario y forestal de cada país. En base al análisis de estos informes, este Documento de Trabajo identifica y analiza cuatro conjuntos de factores y desafíos claves que inciden sobre la perspectiva de implementación de las Contribuciones Nacionales en el contexto latinoamericano. En primer lugar, el nivel de articulación de las metas y medidas planteadas en las Contribuciones Nacionales con las políticas de desarrollo; en segundo término, la fortaleza de la institucionalidad para implementar las medidas de las Contribuciones Nacionales; tercero, la disponibilidad y la capacidad de transferencia de información e innovación tecnológica; y cuarto, factores políticos que inciden sobre las perspectivas de implementación de las contribuciones.

II. Introducción

Este trabajo se enmarca en una iniciativa de la Plataforma Climática Latinoamericana (PCL) que tiene por objetivo fortalecer la capacidad de los actores sociales para participar y monitorear la implementación de las Contribuciones Nacionales en diferentes países de América Latina. En el marco de esta iniciativa, durante el segundo semestre del 2016, miembros de la PCL elaboraron informes nacionales en 10 países de la región en los cuales se identificaron y analizaron los principales factores que actúan como facilitadores y obstaculizadores de los procesos de implementación de las Contribuciones Nacionales en el sector agropecuario y forestal de cada país y se plantearon recomendaciones para fortalecer la agenda y los procesos de implementación.

En base al análisis de estos informes, este artículo plantea y analiza algunos de los factores y desafíos claves que inciden sobre la perspectiva de implementación de las Contribuciones Nacionales en el contexto latinoamericano. Específicamente, se abordan cuatro conjuntos de factores: En primer lugar, el nivel de articulación de las metas y medidas planteadas en las Contribuciones Nacionales con las políticas de desarrollo; en segundo término, la fortaleza de la institucionalidad para implementar las medidas de las Contribuciones Nacionales; tercero, la disponibilidad y la capacidad de transferencia de información e innovación tecnológica; y cuarto, factores políticos que inciden sobre las perspectivas de implementación de las contribuciones.

Es importante subrayar que este artículo no es un resumen de los informes nacionales. Tampoco sustituye el análisis detallado y las recomendaciones específicas que se plantean en cada informe nacional de acuerdo a las características propias de cada país. En este sentido, este artículo es más bien un ejercicio de generalización y de tipificación de aquellas cuestiones y nudos problemáticos claves que afectan la implementación de la agenda climática en distintos países de la región, más allá de los contextos específicos de cada caso.

El artículo está organizado de la siguiente manera. En la primer parte, se realizan algunas consideraciones sobre el objeto y alcance de los informes nacionales y la metodología utilizada. En la segunda parte, se analizan los cuatro conjuntos de factores señalados previamente. En la última parte, se plantean algunas conclusiones y reflexiones claves resultantes del análisis.



III. Algunas consideraciones metodológicas

Como se mencionó previamente, este trabajo se basa en informes desarrollados en 10 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Para armonizar el alcance de los trabajos nacionales, se elaboró un marco conceptual y metodológico común de forma tal que las categorías de análisis utilizadas en los informes nacionales fuesen las mismas. A continuación, se describen algunas de las definiciones y conceptos más importantes que estructuraron el trabajo de cada grupo de investigación.

Unidad de análisis. La unidad de análisis de los informes nacionales fue la Contribución Determinada Nacional (NDC por la sigla en inglés) de cada país en lo relativo al sector agropecuario y forestal. En el caso de aquellos países que todavía no hubiesen comunicado su NDC a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, o ratificado el Acuerdo de París, el análisis se centró en la Contribución Prevista Determinada a nivel Nacional (INDC por la sigla en inglés). Tal es el caso de Ecuador, Colombia (países que al momento de elaboración de este informe todavía no habían ratificado el Acuerdo de París) y Uruguay (que si había ratificado el Acuerdo de París, pero no había comunicado su NDC a la Secretaría de la Convención).

Foco temático. Los informes nacionales focalizaron su análisis en las Contribuciones Nacionales relacionadas al sector agropecuario y forestal. Utilizando la terminología del IPPC 2006, los informes nacionales analizaron aquellas actividades comprendidas por la categoría de Agricultura, Silvicultura y otros Usos del Suelo (AFOLU, en la sigla en inglés).

En este sentido, esta iniciativa de la Plataforma Climática Latinoamericana da continuidad al trabajo que comenzó a desarrollar la PCL en este sector con los informes sobre el *Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático en el sector agropecuario y forestal*, elaborados en el 2012. Varias razones explican la decisión de la Plataforma de focalizar estos trabajos de análisis en el sector agropecuario y en bosques. En primer lugar, la actividad agropecuaria ocupa un lugar central en la mayoría de las economías de la región debido a su contribución al PBI, a la generación de empleo y a las exportaciones (CEPAL 2009, 39-40). Además, el sector desempeña un rol clave en la producción de alimentos para el consumo interno y en garantizar la seguridad alimentaria de la población. Por otro lado, se trata de un sector productivo altamente sensible al cambio climático.

En segundo lugar, el sector AFOLU tienen un rol importante en la matriz de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los países de la región, ya sea como sumidero o fuente de emisiones. De acuerdo a los datos más recientes consignados en los informes nacionales, las actividades agropecuarias y cambios de uso de suelo representan una de las principales fuentes de emisiones de GEI en la mayoría de los países analizados: Argentina (48.9 % de las emisiones)¹, Bolivia (90%)², Brasil (67%)³, Colombia (58%)⁴, Ecuador (48%)⁵ Paraguay (94%)⁶, Perú (66%)⁷.

¹ Fuente, Datos de emisiones del 2012, consignados en la Tercera Comunicación Nacional publicada en el 2015.

² Fuente, Inventario nacional de emisiones de GEI de marzo 2003, citado por el informe Bolivia.

³ Fuente, SEEG 2016, citado por el informe Brasil.

⁴ Fuente, Informe Bienal de Actualización a la CMNUCC del 2015, citado por el informe Colombia.

⁵ Fuente, Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 2010, Primer Informe Bienal de Actualización a la CMNUCC, citado por el informe Ecuador.



Por su parte, en el caso de Chile, Uruguay y Costa Rica, el sector forestal cumple un rol central en la matriz de emisiones de dichos países como sumidero de carbono, detrayendo emisiones del total de GEI emitidos a nivel país (Zanetti et al 2017). Estos datos claramente resaltan la importancia del análisis de la implementación de las Contribuciones Nacionales en relación al sector agropecuario y bosques en América Latina.

Análisis de factores que afectan implementación: Para el análisis de los factores que afectan la implementación de las Contribuciones Nacionales, los autores de cada informe nacional desarrollaron un análisis del campo de fuerzas. Esta es una herramienta de análisis que tiene por objetivo identificar, analizar y valorar la relevancia de los factores que inciden sobre una iniciativa o una política (en esta caso, la Contribución Nacional), ya sea de una manera favorable (los factores que tienden a facilitar y promover la implementación de la Contribución Nacional), como también de una manera contraria u obstaculizadora (aquellos factores que frenan u obstaculizan la implementación de la Contribución), para luego poder definir medidas y estrategias para potenciar a las primeras y reducir o eliminar a las segundas (Start y Hovland 2004; Fernández Arroyo y Schejtman 2012).

En el desarrollo de los análisis del campo de fuerza, el término factores/fuerza se utilizó de un modo amplio. De esta manera, los autores de los informes nacionales pudieron incluir en los análisis diferentes tipos de aspectos y elementos que afectan la implementación de las Contribuciones Nacionales en cada país (factores socio-económicos, marcos institucionales, disponibilidad de recursos, posiciones de actores relevantes, coyunturas políticas específicas, etc.). Para la elaboración de los análisis, se utilizaron fundamentalmente fuentes documentales y entrevistas a expertos y referentes en el tema en cada país.

IV. Factores Facilitadores y Obstaculizadores

En base a los informes nacionales, identificamos cuatro categorías de factores claves que afectan la implementación de las Contribuciones Nacionales: el nivel de articulación con los procesos y políticas de desarrollo; la fortaleza de la institucionalidad para implementar las medidas AFOLU; la disponibilidad y transferencia de información e innovación tecnológica; y factores políticos.

1. Nivel de integración con procesos y políticas de desarrollo

El nivel de integración y articulación de las metas y medidas AFOLU con los procesos, políticas y estrategias de desarrollo es un factor clave que nos habla de la viabilidad de alcanzar los objetivos comprometidos en las Contribuciones Nacionales. Sin embargo, en varios de los informes, se identifican políticas y programas de gobierno que promueven procesos y prácticas productivas en el sector agropecuario y forestal que van en dirección contraria a una estrategia de desarrollo baja en carbono y por ende, inciden negativamente en las perspectivas de alcanzar los objetivos planteados en las Contribuciones Nacionales, ya sea en términos de reducción de emisiones o de fortalecimiento de las capacidades de adaptación.

⁶ Fuente, Inventario Nacional de Emisiones de GEI del 2011, Primer Informe Bienal de Actualización ante la CMNUCC, citado por el informe Paraguay.

⁷ Fuente, Informe Final de la Comisión Multisectorial, Resolución Suprema 129-2015, citado por el informe Perú.



Por ejemplo en el caso de Bolivia, el informe plantea que el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 incluye una serie de metas que están en directa tensión con los compromisos planteados por ese país en su Contribución Nacional en relación a protección de bosques. El Plan de Desarrollo plantea la promoción de la exploración y explotación de hidrocarburos y el desarrollo de hidroeléctricas en zonas de alta cobertura boscosa, como así también una ampliación progresiva de la superficie cultivada. En esta línea, se inserta la cumbre agropecuaria “Sembrando Bolivia” organizada por el Gobierno nacional en abril de 2015 y en la cual se planteó relanzar al sector agropecuario del país mediante la ampliación de la frontera agrícola, cuadruplicando la actual producción agropecuaria.

Varios informes nacionales también destacan factores macro-económicos que afectan desfavorablemente las perspectivas de implementación de las medidas AFOLU de las Contribuciones Nacionales. El informe de Argentina, por ejemplo, subraya que la demanda internacional de granos (y su consecuente impacto en los precios) es el principal motor del avance de la frontera agrícola que hace poco competitivo mantener el bosque nativo en tierras con aptitud agrícola. De acuerdo al informe de Argentina, esta es la principal variable de análisis de la tensión entre el sector agropecuario y protección de bosques nativo en dicho país. Análisis y planteos similares se desarrollan en el informe de Paraguay con relación al rápido crecimiento del sector ganadero en la región chaqueña de dicho país, en la cual se verifica el 95% de la deforestación que sufre Paraguay según datos de la FAO consignados en el informe, como así también en el informe de Brasil respecto al avance de la producción agropecuaria en el Cerrado, región que se ha transformado en el área clave para la expansión de la frontera agropecuaria en Brasil.

El informe de Uruguay, por su parte, plantea que en el caso de la carne, el mercado no genera los incentivos adecuados para avanzar en un manejo sustentable de la ganadería. Uruguay es tomador de precios a nivel internacional y esos precios no reconocen o incorporan las mejoras de los estándares ambientales de producción, tales como los avances que se han realizado en Uruguay en relación al manejo ganadero en campo natural. Esto claramente es un elemento obstaculizador para el avance y consolidación de estas prácticas orientadas a una gestión ganadera más sustentable, en un sector en el cual prima un paradigma de mayor producción en base a la expansión territorial de la actividad o al aumento en la cantidad de animales y de inversión. Similares argumentos se plantean en el informe de Paraguay con relación al rol de los mercados internacionales y la producción ganadera en el Chaco.

En este contexto, cobran especial importancia el abanico de políticas y herramientas que se pueden desarrollar desde el Estado para integrar la problemática climática en las estrategias de desarrollo y promover cambios en los procesos productivos. En los distintos informes se identifican y describen una serie de políticas y programas que tienen por objetivo generar incentivos a los actores productivos para la adopción de prácticas bajas en carbono en el sector AFOLU y que se considera pueden cumplir un rol clave en la implementación de las Contribuciones Nacionales. Sin embargo, el desarrollo y la ejecución de estos programas y políticas de incentivos no están exentos de dificultades. A título ejemplificativo, a continuación analizamos el programa de agricultura de bajo carbono (Plan ABC) de Brasil y el fondo de la Ley de Bosque Nativo de Chile, y señalamos algunos de los principales problemas y desafíos que enfrentan estas políticas y programas gubernamentales.



El informe de Brasil subraya la relevancia del Plan ABC para alcanzar las metas planteadas en la Contribución Nacional para el sector agropecuario, específicamente recuperar 15 millones de hectáreas de pasturas degradadas al 2030 e incrementar en 5 millones de hectáreas los sistemas integrados agrícolas-ganaderos-forestales –ILPF- al 2030. El Programa ABC consiste en un sistema de concesión de créditos a productores agropecuarios, además de asistencia técnica y capacitación, para incentivar la adopción de prácticas y tecnologías bajas en emisiones de carbono, tales como tecnologías de recuperación de pasturas degradadas (RP) y la implementación de sistemas integrados (ILPF). La lógica del plan es precisamente generar incentivos positivos para que los productores adopten prácticas bajas en carbono a través de la integración de criterios y requisitos de sustentabilidad en las líneas de financiamiento.

Sin embargo, el funcionamiento del programa ABC enfrenta una serie de dificultades. En primer lugar, el informe de Brasil destaca que el programa cuenta con poco financiamiento. De acuerdo al informe, los fondos que recibe el Plan ABC equivalen aproximadamente al 2% del total de recursos que recibe el *Plano Safra*, otro sistema de crédito rural diseñado por el Estado brasileiro, el cual no incorpora criterios ambientales en la concesión de créditos. Además, los niveles de financiamiento destinados al Plan ABC se han venido reduciendo progresivamente en los últimos años. Este nos habla no solo de la falta de recursos suficientes que sufre el Plan ABC, sino también de un fuerte déficit de integración de los objetivos climáticos y ambientales del programa con el resto de política agropecuaria. Si el nivel de recursos que el Estado destina para este programa es sustancialmente inferior al nivel de financiamiento público disponible para la agricultura convencional, es razonable suponer que esto puede neutralizar los impactos positivos que generan las medidas de promoción de prácticas agrícolas de bajo carbono. En segundo lugar, además de la falta de recursos, el programa sufre de un bajo nivel de desembolsos. El informe de Brasil señala diversos factores que explican este déficit, entre ellos, procesos burocráticos del sistema financiero que dificultan el acceso al crédito, bajo nivel de conocimiento del programa y sus líneas de financiamiento entre los productores, y falta de asistencia técnica y extensión rural.

Por su parte, en el caso de Chile, el informe identifica a los incentivos económicos contemplados en la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal como uno de los factores que pueden favorecer la implementación de las metas AFOLU comprometidas en la Contribución Nacional. Recordemos que una de las medidas planteadas en la Contribución Nacional de Chile es recuperar y manejar de manera sustentable 100.000 hectáreas de bosques, principalmente nativos. Para ello, las disposiciones e instrumentos de política establecidos por la Ley de Bosque Nativo adquieren una especial importancia, en particular el Fondo de Conservación, Recuperación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo. Este fondo tiene por objetivo transferir recursos, previo concurso de proyectos, a propietarios de predios, a los fines de cubrir los costos de acciones de protección, recuperación y planes de manejo de bosques nativos. Sin embargo, el funcionamiento del Fondo enfrenta una serie de dificultades que se reflejan en un bajo nivel de desembolsos. De acuerdo al informe de Chile, el bajo nivel de conocimiento del Fondo entre los propietarios de predios, la complejidad del procedimiento para acceder a los subsidios y especialmente las limitaciones del sistema de incentivos - que no generan interés entre los propietarios por cambiar la manera tradicional o convencional de usar el bosque-, explican en gran parte la subutilización de los recursos del Fondo e, indirectamente, hablan de su bajo nivel de impacto para revertir los procesos de deforestación y degradación que sufre el bosque nativo en Chile.



Estos casos ponen de manifiesto dos condiciones claves que inciden fuertemente en la capacidad que pueden tener los programas y políticas de incentivos en el sector AFOLU para integrar la problemática climática en los procesos de toma de decisión sobre desarrollo. En primer lugar, **la relevancia o entidad de los sistemas de incentivos que se ofrecen a los actores productivos**; en términos económicos, si no se cubren los costos de oportunidad de adoptar medidas y prácticas bajas en carbono, es menos probable que los actores adopten medidas AFOLU en relación a otros usos de la tierra que generan mayores retornos (Smith et al 2014). En segundo lugar, **la disponibilidad de fondos suficientes (ya sea de fondos nacionales o de fuentes externas) para llevar adelante estas políticas y programas**. Si bien el financiamiento no es una condición suficiente para el éxito de estos programas -hay además otra serie de factores que inciden en la efectividad de un programa o política-, sí se puede considerar como una suerte de condición necesaria para su implementación.

2. Fortaleza de la institucionalidad

En el marco de este artículo, por institucionalidad hacemos referencia tanto a los marcos normativos (leyes, regulaciones, etc.) como a los organismos del Estado relevantes para implementar las Contribuciones Nacionales en el sector AFOLU. A partir de los análisis de los informes nacionales, queremos subrayar tres elementos o factores de la institucionalidad que pueden incidir fuertemente, facilitando u obstaculizando, los procesos de implementación.

El primer factor se refiere al marco normativo disponible para avanzar con la implementación de las metas y medidas AFOLU previstas en las Contribuciones Nacionales. En otras palabras, hasta qué punto un país ya cuenta con un marco normativo (leyes, regulaciones, etc.) que sustente y operacionalice las medidas de la Contribución Nacional o, si por el contrario, es necesario desarrollar ese marco normativo. Del análisis de los informes nacionales resulta que la mayoría de las principales medidas y metas AFOLU planteadas en las Contribuciones Nacionales —especialmente las vinculadas al tema mitigación- se sustentan en políticas y normas ya existentes. Esta es una situación que facilita y permite avanzar más rápidamente en la implementación. A los fines de ejemplificar este punto, mencionamos el caso de Argentina. Las medidas AFOLU con mayor potencial de reducción de emisiones previstas en la planificación de la Contribución Nacional de dicho país -implementación de planes de aprovechamiento forestal o silvopastoril en áreas amarillas, de planes de conservación o silvopastoriles en áreas verdes; de captura de emisiones por recuperación de bosques en el Chaco y en la Selva Misionera- se sustentan en las disposiciones e instrumentos de políticas establecidos en la ley 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.⁸ Esta situación se repite en la mayoría de los países analizados. Si bien puede ser necesario el desarrollo de algún tipo de normas secundarias, la estructura normativa básica para avanzar con las medidas y metas planteadas en las Contribuciones Nacionales ya está disponible.

⁸ Los colores que se señalan en las medidas hacen referencia a las áreas y categorías de conservación de bosques nativos establecidos por la ley 26.331. Esta ley establece tres categorías: las áreas rojas son aquellas superficies con un alto valor de conservación y en las cuales está prohibida la deforestación; las áreas amarillas son áreas de un valor medio de conservación, en las cuales se permite la realización de ciertas actividades productivas previa presentación de estudios de impacto ambiental; y finalmente, las áreas verdes, son áreas de bajo valor de conservación y que pueden transformarse por actividades productivas.



Para enfatizar la importancia de este factor es útil señalar la situación diferente que enfrenta Chile en relación a este punto. La Contribución Nacional de Chile en el tema bosques está condicionada a que se cumplan tres reformas sustanciales de carácter normativo a nivel nacional: modificación de la Ley 20.283 sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal; prórroga del Decreto Ley 701 (DL 701) de fomento forestal; y sanción de una nueva ley de fomento forestal. El informe de Chile plantea fuertemente que esto constituye un serio obstáculo para el cumplimiento de las contribuciones de Chile en el sector forestal. En primer lugar, los tiempos (y resultados) de cualquier proceso de negociación y aprobación legislativo son inciertos lo cual puede generar excesivos retrasos en la implementación de la Contribución Nacional. En segundo lugar, si bien hay un importante nivel de apoyo entre diversos actores políticos, sociales y comunidad científica respecto de la necesidad de modificar y fortalecer la ley de bosque nativo y de crear una nueva ley de fomento forestal, no es el caso con respecto a la prórroga del Decreto Ley 701. Este Decreto establece una política y un sistema de subsidios estatales a plantaciones forestales que es objeto de fuerte rechazo por parte de diversos sectores, sociales, políticos y académicos por el alto impacto socio-ambiental que ha generado. En este sentido, el Informe de Chile señala que el sistema de subsidios del DL 701 expiró a fines de 2012 y no ha podido ser prorrogado pese a los intentos de los gobiernos de Piñera y la actual administración de Bachelet, lo cual habla de la falta de consenso político y social sobre el tema. Más allá del análisis de las razones políticas por las cuales el gobierno incorporó esta condicionalidad en la Contribución Nacional, el informe de Chile enfatiza que al haber el Estado chileno supeditado sus contribuciones en el sector forestal a la reforma y generación de nuevos marcos normativos, se dificulta la implementación de las medidas y el cumplimiento de las metas planteadas para ese sector.

Con relación a las metas y medidas de adaptación planteadas en las Contribuciones Nacionales, la situación es más diversa entre los países analizados. En algunos casos, las metas y medidas se sustentan en políticas y en un andamiaje normativo ya existentes. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, las Contribuciones Nacionales en temas de adaptación se construyen sobre una serie de políticas, programas y medidas concretas que se vienen desarrollando, especialmente en el sector agrícola ganadero, tales como la elaboración de los Planes Nacionales de Adaptación sectoriales (NAPs); la creación del Sistema Nacional de Información Agropecuaria y otras medidas y programas. En otros países, sin embargo, las contribuciones relacionadas a adaptación son más genéricas y claramente requieren de la formulación de políticas y normativas específicas para su desarrollo e instrumentación. El informe de Costa Rica, por ejemplo, plantea que las medidas de adaptación planteadas en la Contribución Nacional son menos concretas que las de mitigación. El informe señala que el país está en el proceso de elaboración de una hoja de ruta para su Plan Nacional de Adaptación, con el compromiso de desarrollarlo en el 2018. De la misma manera, el informe de Perú señala que a diferencia de las acciones de mitigación detalladas en la Contribución Nacional, las acciones y objetivos de adaptación fueron planteados en forma muy general. La Contribución plantea que las estrategias y acciones se definirán a través del Plan Nacional de Adaptación, el cual a la fecha de elaboración del informe nacional, todavía no había sido aprobado. Estos casos ejemplifican situaciones en las cuales las metas o medidas planteadas en las Contribuciones Nacionales, claramente requieren de instrumentos y normativas complementarias para ser implementadas.



Un segundo factor crítico, es la capacidad de los organismos del Estado para implementar las Contribuciones Nacionales en el sector AFOLU. En los 10 informes nacionales se resaltan diferentes aspectos relacionados a la capacidad estatal, que afectan las perspectivas de implementación de las Contribuciones Nacionales. En este sentido, es importante hacer un par de aclaraciones conceptuales sobre la noción de capacidades estatales. En primer lugar, la diversidad de aspectos planteados en los informes nacionales refleja el carácter multidimensional del concepto de capacidad estatal, que incluye a una serie de capacidades y recursos diferentes con los que cuenta -o debe contar- el Estado para intervenir en los asuntos públicos (Asinelli y Acuña 2015). En segundo término, el análisis de las capacidades estatales está fuertemente asociado al tipo de problema sobre el cual se debe intervenir. No todos los problemas públicos o áreas de política pública requieren de las mismas capacidades estatales, o por lo menos, no con la misma intensidad (Asinelli y Acuña 2015).

En base a este marco conceptual, diferentes secciones de este artículo identifican distintas capacidades del Estado que son claves para la implementación de las medidas AFOLU en los países de la región. La sección anterior hace referencia a la capacidad del Estado de integrar y articular los objetivos climáticos y los de desarrollo, como también a la disponibilidad y capacidad de gestión de los recursos económicos necesarios para la implementación de las medidas previstas en las Contribuciones Nacionales. En la sección siguiente, se hace referencia a la capacidad del Estado de producir y gestionar información relevante para la toma de decisiones en materia de cambio climático así como a la capacidad de transferir información e innovación tecnológica a otros actores sociales. En esta sección, se identifica otro aspecto de la capacidad del Estado clave para alcanzar las metas planteadas en las Contribuciones Nacionales en materia de AFOLU: la capacidad de contralor.

En varios informes se plantea la debilidad de los organismos de control y fiscalización como un factor que afecta seriamente la efectiva implementación de las Contribuciones Nacionales, especialmente en lo relacionado al control de la deforestación ilegal y uso sustentable de los bosques. El informe de Bolivia por ejemplo, señala que solo el 5% de los instrumentos de control son implementados por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), y que este organismo tampoco tiene capacidad operativa para detectar a tiempo desmontes ilegales y tomar acciones que mitiguen los efectos de estas acciones. En la misma línea, el informe de Perú subraya fuertemente el deficiente ejercicio por parte del Estado de las funciones de contralor de las regulaciones forestales y plantea que esto se debe, en parte, al deficiente proceso de descentralización de las competencias forestales de parte del gobierno central a los gobiernos regionales y a la falta de transparencia y corrupción en el control de la gestión de los bosques. Estos casos ponen en relieve las limitaciones y dificultades que enfrentan los Estados de la región para monitorear y hacer cumplir las regulaciones de protección ambiental.

El tercer factor a destacar con relación a la fortaleza de la institucionalidad para implementar las Contribuciones Nacionales es el rol que cumplen los gobiernos sub-nacionales. Varios informes señalan que los gobiernos sub-nacionales pueden ser actores claves en los procesos de implementación, dada la dimensión territorial que tiene la agenda climática en el sector AFOLU. Por ejemplo, el informe de Ecuador, identifica al rol regulador del uso del suelo que tienen los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) como uno de los factores que pueden potenciar la implementación de la Contribución Nacional en dicho país. La legislación ecuatoriana exige que los GAD desarrollen Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT); en estos planes se proyecta y regula el crecimiento urbano y rural y se establecen las categorizaciones de usos de suelos. En este marco, el informe de Ecuador destaca que los GAD representan un nivel de gobierno clave para reflejar en su planificación territorial y regulación de uso de suelo, las políticas nacionales de protección de bosques.



Sin embargo, el ejercicio efectivo de este rol por parte de los gobiernos sub-nacionales no está exento de dificultades. Problemas de coordinación y articulación entre los organismos nacionales y sub-nacionales, insuficientes transferencias de recursos y limitadas capacidades de los gobiernos locales son algunos de los nudos problemáticos planteados en diferentes informes nacionales. En el informe de Colombia, por ejemplo, se señala la deficiente articulación entre los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MADS) con los gobiernos locales representados por las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATAS), las cuales proveen asistencia técnica a pequeños productores rurales para aumentar su productividad y promover un uso sustentable de los recursos naturales. De acuerdo al informe, esto es una evidencia de la desconexión que existe en Colombia entre la capacidad de formulación de políticas, programas y resoluciones a nivel nacional y los medios y mecanismos para su implementación y seguimiento a escala territorial. Por su parte, el informe de Perú, pone en evidencia las tensiones y contradicciones que se pueden dar entre los objetivos de políticas nacionales y la gestión de gobiernos subnacionales. El informe de Perú destaca que, en el marco del proceso de descentralización de las competencias forestales del gobierno nacional a los gobiernos regionales, iniciado en el 2009, hay un fuerte déficit de articulación entre la gestión nacional y las regionales. Como ejemplo de este déficit, el informe de Perú señala decisiones tomadas a nivel regional, de promover monocultivos en áreas boscosas, que van en sentido contrario a los objetivos nacionales de control y reducción de la deforestación. El caso de Perú, al igual que los otros casos mencionados, son ejemplos claros de la relevancia que pueden tener los gobiernos sub-nacionales, ya sea como un factor facilitador u obstaculizador, en los procesos de implementación de las Contribuciones Nacionales en el sector AFOLU.

3. Disponibilidad y transferencia de información y tecnologías

La disponibilidad de información es un elemento clave a la hora de tomar decisiones en relación a la problemática climática, tanto a nivel de los funcionarios públicos como de los actores económicos y la ciudadanía en general. Hay una gran variación en la situación en que se encuentran los diferentes países de la región en cuanto a la disponibilidad de información y, en muchos casos, también hay importantes variaciones intra- país de acuerdo a áreas temáticas o sectores. No es el objetivo de este artículo revisar la situación en que se encuentra cada país en este tema, lo cual se aborda, con diferentes niveles de detalle, en los informes nacionales. En esta sección, queremos destacar dos tipos de situaciones genéricas que afectan la implementación de las metas y medidas AFOLU en diversos países de la región: en primer lugar, situaciones en las cuales hay déficits en la disponibilidad de información relevante tanto para la formulación y gestión de políticas, como para su monitoreo. En segundo lugar, situaciones en las cuales hay avances en la generación de información e innovación tecnológica, pero los déficits se presentan fundamentalmente en la transferencia y apropiación de ese conocimiento o información por parte de los actores sociales.

Costa Rica nos provee un ejemplo del primer tipo de situación al que hacemos referencia. El informe de Costa Rica identifica como un factor obstaculizador para el monitoreo y reporte de la implementación de la Contribución Nacional a la falta de confiabilidad y exactitud de las métricas nacionales, especialmente las relacionadas con el sector agropecuario y bosques. El Informe de Costa Rica señala que el propio documento de la Contribución Nacional de Costa Rica reconoce este problema al señalar que *“el potencial de remoción de emisiones por parte del sector forestal es menor que estimaciones anteriores a la actual debido a que los bosques del país son en su mayoría estratos de bosques maduros con un alto stock de carbono, pero una menor capacidad de remoción de carbono de la atmósfera.”* (MINAE 2015, 14, citado por el Informe de Costa Rica).



El informe también señala que los primeros inventarios de emisiones nacionales y sectoriales utilizaron factores predeterminados ante la ausencia de datos nacionales. En este contexto, es importante destacar que Costa Rica está dando pasos para abordar esta cuestión a través del desarrollo del Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático (SINAMECC) que tiene por objetivo mejorar la precisión y exactitud de los datos. El Sistema aún se encuentra en fase de construcción, por lo cual no se puede evaluar su funcionamiento y la calidad de la información que genere.

El informe de Brasil nos provee otro ejemplo interesante de falta de información, al plantear la situación del Catastro Ambiental Rural (CAR). En este caso no se trata de déficits en la generación de información climática propiamente dicha, sino de otros tipos de información pública, pero que impactan fuertemente en la gestión y monitoreo de políticas y programas relevantes desde el punto de vista de la agenda climática. El CAR, establecido en el año 2012 con la ley de reforma del Código Forestal, tiene por objetivo integrar toda la información ambiental disponible sobre una propiedad rural; asimismo, la inscripción en el Catastro es un paso obligatorio para la obtención de cualquier licencia para el uso o explotación de los recursos naturales existentes en una propiedad rural. Sin embargo, el informe de Brasil plantea que el desarrollo del CAR está retrasado y no está funcionando de manera adecuada (por ejemplo, se realizan inscripciones sin cumplir todos los requisitos establecidos en la ley de creación). De acuerdo al informe Brasil, esta situación irregular del Catastro afecta el avance de los Programas de Regularización Ambiental y el monitoreo de las Áreas de Protección Ambiental y de Reserva Legal en el Amazonas, todos programas claves para el cumplimiento de las metas planteadas en la Contribución Nacional de Brasil. La situación irregular del CAR es un claro ejemplo de como la falta de transparencia e información generada desde el Estado puede dificultar las actividades de seguimiento de políticas y medidas incluidas en las Contribuciones Nacionales.

Uruguay, por su parte, en un ejemplo interesante del segundo tipo de situación que planteamos al inicio de esta sección: los problemas en la transferencia de información e innovación tecnológica. El informe de Uruguay destaca los avances realizados en dicho país con relación al fortalecimiento de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos, elementos claves para fortalecer la toma de decisión en temas de adaptación. En este sentido, se mencionan la creación en los últimos años del Instituto Nacional Uruguayo de Meteorología (INUMET), del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) y del Sistema de Información Agropecuaria (SNIA), lo cual ha generado un marco de oportunidades de articulación para la gestión integral del riesgo con mejoras de generación y acceso a la información. Sin embargo, el informe también señala que hay una percepción generalizada entre los expertos consultados para el informe, sobre la existencia de una brecha entre la información que se genera y el manejo de dicha información por los productores rurales; el informe plantea que hay una suerte de rezago tecnológico del sector productivo, fundamentalmente del pequeño y mediano productor rural, que dificulta el acceso y manejo de nuevas tecnologías y procesos de información integrada. Diversos factores explican estas dificultades en los procesos de transferencia y apropiación de nuevos conocimientos y prácticas (insuficiencia de incentivos, cierta resistencia cultural al cambio, etc.). Sin perjuicio de la relevancia de estos elementos, el informe de Uruguay también señala la necesidad de generar profesionales e instituciones que trabajen en la interface entre la generación de la información de relevancia climática y su uso y aplicación parte de los tomadores de decisión, en este caso productores agropecuarios. En resumen, el desarrollo de estas capacidades de intermediación y transferencia de información e innovaciones tecnológicas es un elemento clave para la implementación efectiva de diversos programas y medidas en el sector AFOLU.



4. Factores y contextos políticos

Esta sección analiza algunos de los factores de carácter político mencionados en los informes nacionales, que afectan o pueden afectar los procesos de implementación de las metas y medidas planteadas en las Contribuciones Nacionales. En muchos casos, estos factores responden a cuestiones coyunturales o procesos específicos propios de cada país. El proceso de postconflicto en Colombia es un buen ejemplo de este tipo de situaciones, además de la relevancia histórica que tiene este proceso en sí mismo. El informe de Colombia considera que el proceso de paz es uno de los factores claves que puede afectar profundamente la implementación de la Contribución Nacional en el sector AFOLU, ya sea de una manera positiva -por ejemplo, ‘traccionando’ fondos internacionales para ejecutar la Estrategia de Desarrollo Rural Integral Sostenible en las zonas de conflicto-, como también de una manera desfavorable – por la irrupción y avance de actividades extractivas de una manera no planificada y sin control estatal en las áreas que eran previamente controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Más allá de las situaciones coyunturales o procesos políticos específicos de cada país, hay factores de naturaleza política que se presentan, con mayor o menor relevancia, en los distintos países analizados. En este sentido queremos mencionar dos temas o cuestiones en particular: el potencial impacto de los procesos electorales y los cambios de gobierno, y la fortaleza de las coaliciones sociales y políticas que apoyan y sostienen la agenda climática.

En primer lugar, los procesos electorales y los cambios de gobierno pueden generar incertidumbre en cuanto a la continuidad o cambio de los compromisos y políticas climáticas existentes. Por ejemplo, el informe de Ecuador -país que estaba viviendo un proceso electoral a nivel nacional al momento de elaborarse el informe nacional-, plantea que el cambio de gobierno puede ser un factor que afecte la implementación de las metas y medidas planteadas en la Contribución Nacional. Es claro que los cambios de administración son parte de la dinámica de los regímenes democráticos, una de cuyas características diferenciadoras es precisamente la posibilidad de alternancia en el poder. La pregunta clave es hasta qué punto la participación en el Acuerdo de París, y más específicamente las Contribuciones Nacionales, son objeto de consenso entre los principales partidos y coaliciones políticas de cada país.⁹

En general, en el panorama político latinoamericano no se observa que partidos o coaliciones políticas centrales de los diferentes países de la región analizados, hayan asumido posiciones de abierto rechazo al Acuerdo de París o más genéricamente a la agenda climática. Esto diferencia a los países de América Latina de otros países, como es el caso de EEUU o Australia, en los cuales algunas de las coaliciones políticas centrales han asumido claras estrategias adversariales en relación a la agenda climática. Esto nos habla de un cierto nivel de consenso político interno en los países de la región analizados, con relación al Acuerdo de París y a la necesidad de aportar a este proceso a través de las Contribuciones Nacionales. Sin embargo, más allá de estos elementos de consenso, puede haber diferencias importantes entre las distintas coaliciones y partidos políticos principales en cada país en cuanto a la profundidad o ambición de las metas alcanzar, sectores prioritarios a intervenir o políticas a desarrollar.

⁹ Por partidos o coaliciones políticas centrales hacemos referencia a aquellas que son electoralmente más relevantes en un sistema político. La razón de subrayar el posicionamiento de estos actores frente a la problemática climática es porque estos son los partidos y coaliciones que tienen mayor probabilidad de influir en la política pública y promover u obstaculizar la agenda climática, ya sea como parte de coaliciones de gobierno o desde la oposición.



Fuertemente vinculado a lo anterior, un segundo factor político a destacar se refiere a la fortaleza (o debilidad) de los consensos y coaliciones sociales que apoyan la agenda climática en los países de la región y cómo ello puede impactar en la implementación de las Contribuciones Nacionales. En varios de los informes nacionales se aborda esta cuestión al analizarse diferentes programas o políticas de gobiernos. A título de ejemplo, es interesante mencionar el caso de Brasil con relación a las políticas de control de la deforestación en el Amazonas y el Cerrado. El informe de Brasil subraya que la Contribución Nacional plantea una meta de deforestación ilegal cero al 2030 en el Amazonas, pero no incluye al Cerrado, una de las regiones de país más expuestas a la deforestación. Asimismo, el informe señala que el avance del proceso de deforestación en el Cerrado contrasta con los avances que ha alcanzado Brasil en la protección de los bosques en el Amazonas. Hay una serie de factores que explican estos distintos procesos. Sin perjuicio de la relevancia de todos ellos, quisiéramos resaltar dos elementos mencionados en el informe de Brasil que se refieren directamente al tema que estamos analizando en esta sección. En primer lugar, el proceso de deforestación y degradación del Cerrado no es objeto del nivel de atención y preocupación por parte de la opinión pública brasilera como sí lo es la problemática de la deforestación en el Amazonas. Asimismo, en el caso del Cerrado hay una fuerte resistencia del sector agropecuario al avance de políticas y medidas claves para enfrentar la problemática de la deforestación, mientras que en el Amazonas hay actores económicos relevantes que han apoyado y acompañado medidas claves como es el caso de la moratoria de carne y de soja. Estos dos elementos nos hablan del diferente nivel de fortaleza y capacidad de incidencia política de las coaliciones sociales “pro-sustentabilidad” actuantes en uno y otro caso y, en parte, explican los diferentes resultados y trayectorias de las agendas y políticas de control de la deforestación en el Cerrado y el Amazonas.

V. Conclusiones y mensajes claves

El análisis desarrollado previamente nos permite plantear algunas reflexiones generales sobre cómo fortalecer la implementación de las Contribuciones Nacionales en el sector AFOLU en los países de la región. Es importante resaltar que estas reflexiones tienen un carácter general y no plantean propuestas de reformas puntuales, para lo cual es necesario considerar las características propias del sistema político, legal, etc., de cada país. Este nivel propositivo más detallado es abordado por los informes nacionales, en los cuales se plantean recomendaciones específicas para cada país analizado. Las reflexiones que se plantean a continuación tienen por objetivo destacar algunos de los ejes problemáticos claves y desafíos en común que enfrentan los países de la región para avanzar la implementación de las Contribuciones Nacionales en el sector AFOLU.

* Es fundamental **promover y fortalecer la integración y articulación de las medidas y metas planteadas en las Contribuciones Nacionales con los procesos y políticas de desarrollo que lleva adelante un país.** En varios de los informes se identifican políticas y programas de gobiernos que promueven procesos y prácticas productivas en el sector agropecuario y forestal que van en dirección contraria a una estrategia de desarrollo baja en carbono y por ende inciden negativamente en las perspectivas de alcanzar los objetivos planteados en las Contribuciones Nacionales, ya sea en términos de reducción de emisiones o de fortalecimiento de las capacidades de adaptación. El nivel de integración de las medidas AFOLU con los procesos, políticas y estrategias de desarrollo es un factor clave que habla de la viabilidad de alcanzar las metas y objetivos comprometidos en las Contribuciones Nacionales, además de potenciar los beneficios de las Contribuciones Nacionales para el desarrollo de los países analizados.



* Es preciso **robustecer los programas y políticas de incentivos para la adopción de prácticas bajas en carbono en el sector AFOLU**. En los informes nacionales se destacan dos elementos que inciden fuertemente sobre la capacidad de los programas y políticas de incentivos en el sector AFOLU para integrar la problemática climática en las agendas y procesos de toma de decisión sobre desarrollo; en primer término, la relevancia o importancia de los incentivos que se ofrecen a los actores productivos; si los incentivos no son lo suficientemente atractivos, es menos probable que los actores adopten medidas AFOLU en relación a otros usos de la tierra que generan mayores retornos económicos. En segundo lugar, la asignación de fondos suficientes, ya sea de fuentes nacionales o externas, para la implementación de estas políticas y programas. La disponibilidad de financiamiento claramente no es una condición suficiente para el éxito de estos programas, pero si se puede considerar como una suerte de condición necesaria para poder llevarlos adelante.

* Es fundamental **avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad necesaria para implementar las Contribuciones Nacionales**. Más allá de las características de cada país, el análisis de los informes nacionales nos permite identificar tres elementos de la institucionalidad particularmente relevantes por su potencial para incidir en las perspectivas de implementación de las Contribuciones Nacionales. En primer lugar, la disponibilidad de una estructura normativa (leyes, regulaciones, etc.) que permita operacionalizar rápidamente las medidas planteadas en las contribuciones. Segundo, las capacidades con que cuentan los organismos del Estado claves para implementar las Contribuciones Nacionales, en particular las capacidades de los organismos de control y fiscalización, dada la relevancia que tiene la problemática de la deforestación en nuestra región. Por último, el nivel de involucramiento de los gobiernos sub-nacionales en los procesos de implementación; la coordinación y articulación entre los diferentes niveles de gobierno (nacional, estadual/provincial, local) es un elemento clave para fortalecer la implementación efectiva de las medidas AFOLU en el territorio.

* Es necesario **mejorar la generación y disponibilidad de información relevante como también la transferencia de información y asistencia técnica a otros actores sociales**. Los déficits en la disponibilidad de información relevante afectan tanto a la formulación y gestión de políticas, como a las actividades de monitoreo y reporte de políticas y medidas AFOLU incluidas en las Contribuciones Nacionales. En relación a los déficits de transferencia, hay situaciones en las cuales hay avances en la generación de información e innovación tecnológica, pero las falencias se presentan fundamentalmente en la asistencia técnica y transferencia de ese conocimiento a los actores sociales, lo cual afecta la adopción e implementación efectiva de esas prácticas y tecnologías más sustentables en el sector AFOLU. Esto pone de manifiesto la relevancia y la necesidad de contar con instituciones y recursos humanos preparados para cumplir roles de articulación e intermediación entre los sistemas científicos tecnológicos, que generan información climática e innovación tecnológica, y los potenciales destinatarios o usuarios de esos nuevos conocimientos.

* Por último, es crítico **fortalecer la construcción de coaliciones políticas y sociales amplias para sostener y avanzar con las Contribuciones Nacionales**. Los procesos de ratificación del acuerdo de París señalan que hay un importante nivel de consenso político interno en los países de la región sobre la necesidad de ser parte del Acuerdo y de aportar a este proceso a través de las Contribuciones Nacionales. Sin embargo, en muchos casos hay diferencias políticas sustanciales entre distintos sectores políticos y sociales en cuanto a la profundidad o ambición de las metas a alcanzar, sectores prioritarios a intervenir o políticas a desarrollar. Esto subraya la importancia de profundizar los procesos de diálogo multisectorial y fortalecer la construcción de coaliciones políticas-sociales amplias que apoyen la agenda climática en los países de la región.



VI. Referencias bibliográficas

- Asinelli, C. y Acuña, C. 2015. Introducción: Por qué 'capacidad estatales' y esta selección para comprenderlas. En Acuña (coordinador). *Capacidades estatales. Diez textos fundamentales*. Buenos Aires: Corporación Andina de Fomento.
- CEPAL. 2009. Cambio Climático y Desarrollo en América Latina y el Caribe. Una Reseña. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- IPCC. 2006. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T., and Tanabe K. (eds). Kanagawa, Japon: Institute of Global Environmental Strategies
- Ministerio Nacional de Ambiente y Energía. 2014. Contribución Previstas y Determinada a Nivel Nacional de Costa Rica. Gobierno de Costa Rica.
- Ryan, D. 2012. Informe Regional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático y Desarrollo en América Latina: Sector Agropecuario y Forestal. Plataforma Climática Latinoamericana.
- Smith P., M. Bustamante, H. Ahammad, H. Clark, H. Dong, E.A. Elsiddig, H. Haberl, R. Harper, J. House, M. Jafari, O. Masera, C. Mbow, N.H. Ravindranath, C.W. Rice, C. Robledo Abad, A. Romanovskaya, F. Sperling, and F. Tubiello. 2014. Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU). En *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Edenhofer, O., R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, T. Zwickel and J.C. Minx (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
- Start, D. y Hovland, I. 2004. Herramientas para el Impacto en las Políticas Públicas: Manual para Investigadores. Londres: Instituto de Desarrollo en Países Extranjeros
- Fernández Arroyo, N. y Schejtman, L. 2012. Planificación de políticas, programas y proyectos sociales. Buenos Aires: Fundación CIPPEC.
- Zanetti, E. A., Gómez García, J., Mostacedo, J. y Reyes, O. 2017. Cambio climático y políticas públicas forestales en América Latina: una visión preliminar. Serie: Documentos de Proyecto. Nro. 728. Santiago de Chile: CEPAL



Informes nacionales

Argentina

Di Paola, María Marta. 2017. Desafíos y Oportunidades para avanzar las Contribuciones Nacionales en el sector agropecuario y bosques en América Latina: El caso de Argentina. Fundación Ambiente y Recursos Natural (FARN).

Bolivia

Vargas Ríos, María Teresa, Angulo, Ana Rosa. 2017. Desafíos y Oportunidades para avanzar las Contribuciones Nacionales en el sector agropecuario y bosques en América Latina: El caso de Bolivia. Fundación Natura Bolivia.

Brasil

Reis, Tiago, Bortolotto, Fernanda, Russo Lopes, Gabriela e Braga, Laura. 2017. Desafios e oportunidades para avançar as Contribuições Nacionais no setor agropecuário e de florestas na América Latina: O caso do Brasil. Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM).

Chile

Seeger P., Maia. 2017. Desafíos y Oportunidades para avanzar las Contribuciones Nacionales en el sector agropecuario y bosques en América Latina: El caso de Chile. SustentaRSE.

Colombia

Arenas Wightman, Wendy y Romero, Camilo. 2017. Desafíos y Oportunidades para avanzar las Contribuciones Nacionales en el sector agropecuario y bosques en América Latina: El caso de Colombia. ALISOS –Alianzas para la Sostenibilidad-.

Costa Rica

Rojas Wang, José Pablo. 2017. Desafíos y Oportunidades para avanzar las Contribuciones Nacionales en el sector agropecuario y bosques en América Latina: El caso de Costa Rica. Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED).

Ecuador

Albán, María Amparo, y Barragán, Daniel. 2017. Desafíos y Oportunidades para avanzar las Contribuciones Nacionales en el sector agropecuario y bosques en América Latina: El caso de Ecuador. ACD Consulting.

Paraguay

Martínez Trabuco, Jorge. 2017. Desafíos y Oportunidades para avanzar las Contribuciones Nacionales en el sector agropecuario y bosques en América Latina: El caso de Paraguay. Fundación Moisés Bertoni.

Perú

Calle, Isabel, Capella, José Luis y Zabarburi, Sharon. 2017. Desafíos y Oportunidades para avanzar las Contribuciones Nacionales en el sector agropecuario y bosques en América Latina: El caso de Perú. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Uruguay

Marrero, Laura y Bizzozero, Federico. 2017. Desafíos y Oportunidades para avanzar las Contribuciones Nacionales en el sector agropecuario y bosques en América Latina: El caso de Uruguay. CEUTA.





www.cdkn.org

www.ffla.net

(+593-2) 223-6351 / 322-7481

Este documento es el resultado de un proyecto encargado a través de la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN). CDKN es un programa financiado por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y la Dirección General de Cooperación Internacional (DGIS) de los Países Bajos en beneficio de los países en desarrollo. Las opiniones expresadas y la información incluida en el mismo no reflejan necesariamente los puntos de vista o no son las aprobadas por el DFID, la DGIS o las entidades encargadas de la gestión de la Alianza Clima y Desarrollo, quienes no podrán hacerse responsables de dichas opiniones o información o por la confianza depositada en ellas.